

Rafael Correa Delgado

(Rafael Vicente Correa Delgado)

Ecuador, Presidente de la República

Duración del mandato: 15 de Enero de 2007 - En funciones

Nacimiento: Guayaquil, provincia de Guayas, 06 de Abril de 1963

Partido político: Alianza PAIS

Profesión: Economista



Resumen

En 2006, tras una década de profunda inestabilidad institucional, Ecuador eligió presidente de la República a un economista de izquierda cuya carrera política, verdaderamente fulgurante, coronó en pocos meses al frente de la Alianza PAIS. Rafael Correa triunfó con un programa centrado en un proceso constituyente, completado en 2008, para refundar el Estado y la democracia ecuatorianos, fortalecer las instituciones a costa de los poderes fácticos tradicionales, priorizar el gasto social y alcanzar la "soberanía" energética y financiera. Sus divisas de la revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI, controvertidas, han sido, empero, masivamente respaldadas en las urnas, en dos referendos y en dos elecciones, la última de las cuales, en abril de 2009, ha revalidado su mandato hasta 2013. En política exterior, Correa se ha alejado de Estados Unidos, ha tenido conflictos con Colombia y, sobre todo, ha trabado alianza con el venezolano Hugo Chávez, con cuyo eje bolivariano converge, aunque sin llegar a ingresar en el ALBA.

Biografía

1. Un economista sin partido crítico con el neoliberalismo
2. Efímero ministerio como trampolín para una ambición presidencial
3. Perfil y programa de un candidato de izquierda
4. Victoria electoral en 2006 frente al multimillonario Noboa
5. La Revolución Ciudadana de Correa; la batalla del proceso constituyente
6. La definición regional: un alineamiento no completo con el eje bolivariano
7. Triunfal reelección en 2009

1. Un economista sin partido crítico con el neoliberalismo

Hijo del hogar de clase media-baja y profundas convicciones católicas formado por los señores Rafael Correa Icaza (ya fallecido) y Norma Delgado Rendón, realizó los estudios primarios y secundarios en el Colegio San José La Salle de su Guayaquil natal. El joven pasó la infancia y la primera juventud en la parroquia o barrio de Pedro Carbo, donde se introdujo en el movimiento Boy Scout y colaboró con los Padres Lasallistas en actividades culturales y religiosas. Presidió también la Asociación Cultural Estudiantil Lasallana (ACEL). Como catequista o como escultista, realizó numerosas salidas fuera de la urbe portuaria, las cuales le permitieron conocer otros aspectos geográficos y humanos del Ecuador. Era un católico creyente y practicante, característica que mantuvo al hacerse adulto.

A finales de los años sesenta Rafael Correa senior cumplió en una prisión estadounidense una condena de tres años por tráfico de drogas. El dato fue revelado por los opositores políticos de su retoño presidente durante la campaña del referéndum de 2007 sobre la Asamblea Constituyente; entonces, Correa hijo reconoció el episodio familiar e intentó explicarlo: "Tuve una niñez muy dura. Cuando tenía cinco años, mi padre, un desempleado, llevó droga a Estados Unidos y cayó preso. Él fue víctima del sistema, no un delincuente, un desempleado que desesperadamente buscó alimentos". Otro mal trago para el niño, y muy doloroso, fue la muerte de una hermana, ahogada en una piscina. Tras este trágico accidente a Rafael le quedaron dos hermanos mayores, Fabricio, el primogénito, y Pierina.

Sus buenas calificaciones escolares le hicieron merecedor de una beca con la que en 1982 pudo matricularse en la Facultad de Economía, Administración y Auditoría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Mientras cursó la carrera, trabajó de asistente de cátedra y, fuera de las aulas, como especialista industrial en el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES), un organismo adscrito al Ministerio de Industrias. Asimismo, estuvo al frente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad, función que le condujo a presidir durante un año, en 1986, la Federación de Estudiantes de la UCSG y la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE).

En julio de 1987 se sacó la licenciatura con una tesis titulada Evaluación de los programas de apoyo al sector informal en Guayaquil, trabajo que recibió una mención especial del tribunal académico, y con el título de economista bajo el brazo se dispuso a emprender una carrera profesional. Antes, sin embargo, destinó un año a realizar labores de voluntariado social en la misión que los lasallanos tenían en Zumbahua, poblado del cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi, a 3.600 metros de altitud, donde ayudó a aplicar proyectos de desarrollo rural para las comunidades indígenas. 18 años después, recordando aquella experiencia como una de las mejores de su vida, Correa explicó que en Zumbahua tanto arrimaba el hombro en los trabajos campestres como daba clases de matemáticas elementales y organizaba microempresas agrícolas.

De vuelta a Guayaquil, su alma máter le contrató para que dirigiera las finanzas universitarias y de paso para que impartiera docencia como profesor asociado de Economía en su antigua facultad. Lejos de acomodarse en estos puestos académicos, administrativo el uno y lectivo el otro, en 1989, con el fin de esmerar su formación para poder aspirar a realizar su sueño ?que según él ya tenía entonces- de alcanzar algún día la Presidencia de la República, se apuntó a un concurso nacional de merecimientos con la mirada puesta en sendas becas de posgrado

ofertadas por el Gobierno de Bélgica y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); ganó las dos, y como sólo podía disfrutar una se decantó por el destino europeo. Fue el inicio de un bienio de formación en la Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva, un centro íntimamente ligado al humanismo renacentista, la cual concluyó en junio de 1991 con la obtención de su primer máster en Economía. En Bélgica conoció a su futura esposa, Anne Malherbe, con la que iba a tener tres hijos: Sofía, Anne Dominique y Rafael Miguel.

En 1992 Correa comenzó una trayectoria profesional como docente de su especialidad, pero dejando abierta la puerta a la consecución de nuevos méritos formativos. De profesor asociado en la UCSG pasó, en 1993, a profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), casa de estudios privada donde iba a ejercer con interrupciones en los próximos 12 años, como director departamental y profesor de las asignaturas de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Cuantitativa, Desarrollo Económico y Economía Empresarial.

Hasta 1993 fungió también de directivo en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del Ecuador, con competencias administrativas en programas de mejora del sistema educativo nacional financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Correa no guarda una grata experiencia de su paso por el proyecto MEC-BID: unos meses después de iniciar esta labor en Quito, denunció un caso de corrupción interna y como represalia sus superiores le rescindieron el contrato. "Casi aniquilan mi vida", afirmaba en la página web montada con motivo de su candidatura presidencial en 2006. Sin embargo, sus vínculos con las aulas no se vieron afectados. En 1997 recaló en Illinois, Estados Unidos, para redondear su currículum académico en el Departamento de Economía del campus de Urbana-Champaign de la Universidad de ese estado, donde en mayo de 1999 obtuvo una segunda maestría y en octubre de 2001 se sacó el doctorado. De Estados Unidos se trajo también el bagaje del idioma inglés, cuyo conocimiento sumó al que ya tenía del francés.

A finales de 2001 Correa se reincorporó a la USFQ en calidad de director del Departamento de Economía. En los cuatro años siguientes, consolidó su perfil dando clases como profesor visitante en tres centros de Quito, la unidad académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), y en otros tantos de Guayaquil, concretamente la Universidad Estatal, la Universidad Católica de Santiago (UCSG) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Fue ahora también cuando adquirió experiencia como asesor de economía ecuatoriana, en especial la consultoría de prospectiva y riesgos, para diversos organismos y entidades, entre los que se citan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y la Asociación Ecuatoriana de Agentes de Carga y Logística Internacional (ASEACI).

Asimismo, escribió buen número de artículos de análisis de las actualidades económicas del Ecuador y el conjunto de Sudamérica que fueron publicados por universidades y revistas especializadas. Que el economista era un fuerte detractor del modelo neoliberal lo traslucían los títulos de algunos de sus trabajos, como Más allá de la economía autista; economía y humanismo, El sofisma del libre comercio y Canje de deuda: todo en función de los acreedores. Sus amonestaciones fueron también directas a la gestión y las políticas de los últimos presidentes ecuatorianos, los democristianos Jamil Mahuad Witt y Gustavo Noboa Bejarano, y el ex coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, las cuales fueron puestas en la picota en trabajos como Ecuador: de absurdas dolarizaciones a uniones monetarias y Lo mismo de lo peor: la política económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez. Idéntico tono crítico, que podía considerarse de izquierdas, presidía un libro publicado en 2004 con el sello del PNUD, La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana: hacia una mejor política económica para la generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad.

2. Efímero ministerio como trampolín para una ambición presidencial

Aunque albergaba inquietudes políticas y en sus años de estudiante ya había mostrado

aptitudes para el liderazgo, Correa tuvo un encuentro bastante tardío con la profesión de político a través del corto, pero decisivo, puente de la alta función gubernamental. La oportunidad que iba a dar un vuelco fenomenal a su trayectoria se la brindó en abril de 2005, cuando continuaba dando clases en la USFQ, el recién inaugurado presidente de la República, Alfredo Palacio González, quien le reclutó para un puesto de su Gabinete de las mayores relevancia e importancia: la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La confianza de Palacio se la había ganado Correa tras prestarle asesoría económica a lo largo de su ejercicio como vicepresidente de la República con Lucio Gutiérrez, desde enero de 2003.

Palacio, otro servidor público sin vínculos partidistas ?en su caso, cardiólogo de profesión-, tomó posesión el 20 de abril de 2005 como presidente constitucional con el aval del Congreso para sustituir a Gutiérrez, luego de ser éste declarado cesante en el cargo en medio de una caótica revuelta social cuya espoleta había sido una arbitraria renovación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Palacio era el séptimo presidente ecuatoriano desde 1997 así como el tercer vicepresidente llamado a asumir la jefatura del Estado por la caída, forzada desde la calle, de otros tantos cabezas del poder Ejecutivo, aupados al mismo a través de elecciones democráticas pero rápidamente enfrentados a la ira popular por su gestión corrupta y autoritaria, sus medidas de ajuste liberal de una economía en crisis, y sus extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones institucionales.

Una serie de pecados imperdonables para una población empobrecida y crecientemente hastiada por el incumplimiento sistemático de demasiadas promesas populistas de contenido social, y que se asociaban respectivamente a Abdalá Bucaram Ortiz (destituido por el Congreso por "incapacidad mental" en febrero de 1997), a Jamil Mahuad (puesto en fuga por una asonada de indígenas y militares en enero de 2000), y, en fecha reciente, como resultado de la llamada rebelión de los forajidos, a Lucio Gutiérrez, el último mandatario caído en desgracia. La mudanza presidencial entre Gutiérrez y Palacio apaciguó los ánimos de una población encolerizada con sus gobernantes y con los políticos en general, pero no atajó el profundo malestar de fondo, que podía dar lugar a nuevos estallidos en cualquier momento.

El 21 de abril de 2005, con los rescoldos de la furibunda algarada de Quito aún calientes, Correa se integró en un Gobierno formado íntegramente por personalidades sin partido, tecnócratas y funcionarios, y cuyas tareas perentorias eran, por una parte, las revisiones de la normativa sobre la explotación petrolera por concesionarias privadas y de las negociaciones de los tratados de liberalización comercial, y, por otra parte, el pago de la "deuda social" mediante una redistribución presupuestaria en beneficio de las áreas de salud, educación y protección social. Se trataba de un cambio de rumbo que sin embargo no ponía en cuestión ni la dolarización de la economía, vigente desde la presidencia de Mahuad (y cuya entrada en vigor activó la insurrección que tumbó a aquella administración), ni los compromisos asumidos ante los acreedores de la voluminosa deuda externa. En política exterior, Palacio quería mantener el convenio con Estados Unidos, suscrito en 1999 y vigente hasta 2009, que hacía de la Base Aérea de Manta, en la provincia de Manabí, una instalación militar de uso conjunto, pero sin que ello tuviera que entrañar la participación del Ecuador en el controvertido Plan Colombia, destinado al combate del narcoterrorismo imperante en el país vecino.

El primer cometido gubernamental de Correa, si se exceptúa el trabajo realizado en el MEC entre 1992 y 1993, estuvo caracterizado por la determinación de imprimir un viraje a la izquierda en el rumbo económico del país y por la brevedad (duró menos de cuatro meses), como resultado de ver frustrado ese deseo. Nada más jurar el cargo, el economista confirmó que el dólar estadounidense iba a seguir siendo la divisa nacional del Ecuador, aunque consideró "el mayor error" en la política financiera del país la adopción de dicha medida en enero de 2000. Si bien admitió que "a largo plazo" el esquema monetario podría revertirse, recalcó que del mismo sería "muy difícil salir" y que el Gobierno no tenía vocación de "suicida". Una profesión de pragmatismo continuista que, empero, fue simultánea al anuncio de la eliminación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), el cual colectaba el excedente de los ingresos de Petroecuador, la compañía estatal de hidrocarburos, y destinaba el 70% del mismo al pago de las deudas públicas interna y

externa. Con los recursos del FEIREP, el Gobierno, aseguraba Correa, podía cubrir necesidades fiscales y programas sociales.

Para el ministro, la política petrolera de los gobiernos precedentes había sido "desastrosa" y había "rayado en la traición a la patria". En cuanto al FEIREP, le parecía un mecanismo que favorecía los intereses de los compradores de bonos de deuda pública al fijar por ley un porcentaje de la renta petrolera para el pago de aquella. En junio, el Congreso aprobó la supresión del FEIREP y su reemplazo por la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social, Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS), que establecía una nueva distribución de la financiación, con una reducción de la partida destinada a la recompra de deuda pública desde el 70% al 35%. La activación de la CEREPS, más los avisos de Correa de que el Ecuador, en caso de iliquidez fiscal ¿perspectiva no en ciernes gracias a los elevados precios del petróleo- dejaría de privilegiar el pago de la deuda sobre sus "obligaciones internas", y sometería a referéndum el Tratado de Libre Comercio (TLC) en vías de negociación con Estados Unidos, despertaron recelos en los organismos multilaterales de crédito y en instancias de poder económico de Estados Unidos.

De un día para otro, Correa garantizaba el cumplimiento por el Estado de todos sus compromisos de deuda y se afanaba en clausurar algunas reglas liberales del juego con la negativa a aceptar "ninguna insinuación" del FMI sobre la política económica del Gobierno y a aparcar un "plan económico soberano" que iba a impedir la conversión del Ecuador en una "colonia" del mismo Fondo. Correa adquiría popularidad y fama de lenguaraz a marchas forzadas, y a comienzos de junio elevó muchas cejas al presentarse en Zumbahua, provisto de poncho y sombrero, para anunciar disimuladamente su propósito de convertirse en postulante a la Presidencia en 2006.

Esta acción incrementó las críticas de quienes le acusaban de coquetear con el populismo, de montarse en la creciente ola de rechazo popular al TLC y de pretender convertirse en el nuevo candidato outsider, el valedor de las clases marginadas y el fustigador de las élites dirigentes. En otras palabras, el ministro ambicionaría desempeñar el rol ya jugado en el pasado reciente por los ex presidentes Bucaram y Gutiérrez, por más que tuviera un recorrido vital hartamente disímil y no simpatizara precisamente con ellos. La emergencia de aspirantes presidenciales que rompían los esquemas tradicionales de los partidos encontraba terreno abonado en un sistema político seriamente desprestigiado y debilitado. Cabía decir incluso que las elecciones presidenciales de octubre de 2006 eran una competición completamente abierta por la ausencia de favoritos y la naturaleza no partidista e interina del oficialismo de turno, donde cualquier político con los suficientes carisma, ambición y empuje, y con los imprescindibles fondos de campaña y plataforma de apoyos, podía irrumpir y dar la campanada.

No por casualidad, a partir de la sorpresiva visita a la comunidad indígena, Correa potenció su discurso de sabor decididamente izquierdista. Así, denunció la existencia de una "conspiración interna y externa", impulsada por acreedores y bancos, que perseguía desestabilizar al Gobierno y hacer fracasar su plan de atención a los sectores sociales, a la vez que propuso una "nueva arquitectura financiera donde se vuelva impostergable la creación de un tribunal internacional de deuda". La bofetada recibida a últimos de julio en Washington del Banco Mundial, que desestimó su petición de un préstamo de 100 millones de dólares, precipitó su dimisión el 4 de agosto. El economista declaró que su continuidad en el Gabinete era "insostenible" tras haber "perdido la confianza" de Palacio en relación con sus gestiones con el Gobierno de Venezuela para la compra de bonos de deuda ecuatoriana por valor de 300 millones de dólares y sobre una serie de acuerdos en materia energética.

Según Correa, Palacio había sucumbido a las presiones de un "círculo oscuro" de asesores que le advertían contra una "asociación" del Ecuador con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su ideología bolivariana. El secretario de Comunicación de la Presidencia explicó que Correa había incumplido su obligación de "mantener permanentemente informado" al presidente de los avances y resultados obtenidos en materia económica. Además, el Ministerio de Economía notificó a la prensa que Correa había enviado una carta al presidente del Banco

Mundial, Paul Wolfowitz, demandando una explicación por la denegación del crédito.

Cese decidido por el entorno presidencial o poco menos que fabricado por su protagonista, para tener las manos libres de cara a las elecciones generales del año siguiente, el caso fue que la salida de Correa del Gobierno fue muy mal acogida por movimientos sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que la interpretaron como un frenazo del Ejecutivo a sus políticas de vocación social.

Las amenazas de una "insurrección popular" no fueron del todo vanas, ya que en las semanas y meses siguientes, Palacio encajó una cadena de protestas callejeras, movimientos huelguísticos y acciones de sabotaje de la producción de Petroecuador en las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo, cuyos habitantes acusaban al Gobierno de incumplir sus compromisos de inversión pública en las infraestructuras locales. Esta ola contestataria, impulsada por trabajadores indígenas y apenas contenida por las sucesivas declaraciones del estado de excepción, hizo bandera también del rechazo al TLC con Estados Unidos. Y por si no tuviera suficientes frentes abiertos, Palacio entabló un áspero forcejeo con el Congreso al rechazar éste su plan de llegar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente a través de un referéndum nacional.

3. Perfil y programa de un candidato de izquierda

Mientras Ecuador se adentraba en el enésimo período de inestabilidad, Correa no perdió el tiempo en la preparación de su postulación presidencial. El 4 de diciembre de 2005 formalizó su precandidatura "independiente" en un acto celebrado en la UASB. Con el anuncio de que en 2007 iba a expedirse la "partida de defunción de la partidocracia tradicional", el economista arrancó una campaña proselitista trufada de declaraciones a los medios, giras provinciales, discursos en un aceptable kichwa, según sus oyentes- a comunidades indígenas y viajes al extranjero, donde buscó el contacto con miembros de la extensa diáspora de emigrantes. Fue lo que caracterizó sus desplazamientos a Estados Unidos, España e Italia.

Las visitas realizadas en el ámbito latinoamericano tuvieron, en cambio, un cariz más ideológico, de indicación o confirmación de a dónde se dirigían sus simpatías continentales. En enero de 2006 asistió en La Paz a la toma de posesión presidencial del líder indígena socialista Evo Morales, cuyo triunfo electoral en Bolivia le parecía "la demostración del gran giro hacia lo social que está tomando América Latina respecto del caduco sistema neoliberal".

Ese mismo mes no dejó de acudir a la sexta edición del Foro Social Mundial, en Caracas. En marzo siguiente, en calidad de invitado especial al igual que en su desplazamiento a La Paz, presenció en Santiago la asunción de la socialista Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Y en agosto fue recibido por el argentino Néstor Kirchner en la sede del Gobierno en Buenos Aires, y cenó con Chávez en Caracas luego de impartir en la Universidad Bolivariana de Venezuela una conferencia titulada nueva política económica para Latinoamérica. Además, en febrero, participó en La Habana en el VIII Encuentro Internacional de Economistas, y el 13 de agosto envió una carta de felicitación a Fidel Castro con motivo de su octogésimo aniversario.

Correa reconoció ser un amigo y un gran admirador de Chávez, con quien compartía un nacionalismo de izquierda y neoconstitucional, el rechazo a cualquier integración mercantil con Estados Unidos, ya fuera mediante un tratado bilateral ("botaremos el TLC al tacho de basura de la historia, pues no es un tratado de libre comercio, es un bobo aperturismo y claudicación de la soberanía nacional", manifestó) o a través del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), así como una valoración negativa del presidente George W. Bush. Cuando Chávez, en septiembre, arremetió contra el estadista norteamericano en la Asamblea General de la ONU y le identificó con el Diablo, Correa opinó que "llamar diablo a Bush es ofender al Diablo, porque éste podrá ser malvado, pero es inteligente", para añadir que el mentado se trataba de un presidente "tremendamente torpe que ha hecho mucho daño a su país y al mundo". Sin embargo, insistió en que una cosa era la Administración Bush y otra Estados Unidos, "un país al que quiero mucho", tras haber vivido cuatro años y haberse sacado allí dos títulos académicos. A su entender, Ecuador y Estados Unidos debían tener unas relaciones de "mutuo

respeto".

Correa no se oponía a la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), un instrumento estadounidense que concedía preferencias arancelarias a las importaciones de los países de la región comprometidos en la lucha antidroga, pero no estaba dispuesto a ligar su prórroga a la aceptación del TLC. También afirmó que un Gobierno suyo estrecharía los lazos con Venezuela, Bolivia y Cuba, y por el contrario no renovaría con Estados Unidos el acuerdo sobre la Base de Manta ("si soy presidente en el 2009, primero me cortan la mano antes que renovar ese contrato", dijo al respecto). En cuanto a la polémica sobre las operaciones en el país de la Occidental Petroleum Corporation (Oxy), Correa hizo suya la exigencia de la CONAIE de que Petroecuador rescindiera a esta compañía estadounidense el contrato para la extracción de crudo en la Amazonía ante el cúmulo de violaciones de la Ley de Hidrocarburos que se le imputaban. Cuando en mayo el Gobierno ecuatoriano declaró caducado el contrato con Oxy y su homólogo estadounidense, como represalia, suspendió las negociaciones sobre el TLC, algunos comentaristas señalaron que Correa y otros aspirantes presidenciales que habían hecho de este doble no un estandarte programático se habían quedado cojos de reivindicaciones.

A lo largo de la precampaña y la campaña, Correa negó insistentemente ser el "candidato del chavismo" en Ecuador y rechazó el calificativo de "bolivariano", unos epítetos que difícilmente podía esquivar habida cuenta de las tomas de postura arriba comentadas, que parecían prefigurar, si tomaba posesión del Palacio de Carondelet, un alineamiento geopolítico con el eje liderado por Caracas. Con más vehemencia aún desmintió que Chávez estuviera financiándole, algo que daban por seguro todos los observadores. Preguntado en entrevistas por el líder de la zona con el que se sentía más identificado, su respuesta fue que con el argentino Kirchner, "por su pragmatismo, porque llegó sin levantar expectativa alguna, y ha levantado a la Argentina de la destrucción menemista". Correa se veía a sí mismo como un "socialista con fuentes cristianas, no marxista", y como un "humanista cristiano de izquierda" que creía en una ideología "de amor y no de odio", y que soñaba "con un Ecuador sin miseria, con un Ecuador sin niños en la calle, donde todos y todas, sin opulencia, pero con dignidad y con elementales niveles de bienestar, puedan vivir felices".

Aunque derrochaba desparpajo y una confianza en sí mismo que para sus detractores no era otra cosa que arrogancia, Correa necesitaba, obviamente, una organización política propia, un partido que endosara su candidatura y sostuviera su proyecto de "revolución ciudadana" y "cambio radical", capaz de contender con agrupaciones orgánicas como el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de Álvaro Noboa Pontón, el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP) de los hermanos Lucio y Gilmar Gutiérrez, y el derechista y muy bregado Partido Social Cristiano (PSC), que seguía estando liderado por el ex presidente republicano (1984-1988) y ex alcalde guayaquileño (1992-2000) León Febres-Cordero, gran muñidor de maniobras políticas entre bambalinas. Las del PRIAN y el PSC, en particular, eran dos maquinarias proselitistas bien engrasadas por una abundante financiación de origen empresarial.

Con la implicación de representantes de una amplia variedad de colectivos y sectores de la sociedad civil, Correa puso en marcha la Alianza Ciudadana del Ecuador, que rápidamente pasó a denominarse Alianza PAIS, expresión que como acrónimo significaba Patria Altiva i Soberana. El movimiento político fue lanzado formalmente en Quito el 19 de febrero de 2006 con un "festival cívico" que sus organizadores definieron como el "semillero de la nueva patria". El 29 de julio, dos centenares largos de delegados provinciales de la Alianza PAIS reunidos en Asamblea Nacional oficializaron la candidatura de Correa, que fue proclamada el 5 de agosto en Palestina, Guayas, y registrada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dos días después.

Como compañero de binomio y candidato a la Vicepresidencia Correa escogió a Lenín Moreno Garcés, un antiguo funcionario del Estado que en la actualidad dirigía una fundación dedicada a la investigación y la promoción del humor como fuente de salud y bienestar emocional, tema sobre el que había publicado varios libros. Fuera de la Alianza PAIS salió a respaldar la candidatura de Correa el Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA), formación de izquierda

moderada que procedía de la fusión una década atrás del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Frente Amplio de Izquierda (FADI).

El Plan de Gobierno 2007-2001 de la Alianza PAIS enumeraba cinco ejes programáticos o "revoluciones" con las que acometer la "transformación radical del Ecuador" y "construir el país que soñamos", "un país alegre, optimista, propositivo, donde no haya nadie sin futuro", "un país solidario y comprometido con las angustias de sus habitantes dentro y fuera de sus fronteras". En primer lugar estaba la revolución constitucional y democrática, que pasaba por la inmediata convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente vía referéndum para reformar el Estado en un sentido descentralizador y mejorar las instituciones del sistema democrático; el nuevo texto supremo reemplazaría al promulgado en 1998.

El enemigo a batir aquí era el "poder mafioso de la partidocracia". Puesto que el Congreso estaba "moribundo" y la Asamblea Constituyente ya se encargaría de "estructurarlo profundamente", la Alianza PAIS renunciaba a presentar candidatos a diputado. La decisión resultaba insólita, ya que Correa, de ganar, afrontaría un proceso constituyente con un Legislativo potencialmente hostil hasta el último escaño, salvo que negociara con los mismos partidos que ahora descalificaba. En segundo lugar, no podía faltar una revolución ética, que conllevaría un "combate frontal" y una "lucha a muerte" contra la corrupción y la evasión fiscal, y el establecimiento de mecanismos de transparencia en la administración pública.

En tercer lugar, Correa proponía una revolución económica y productiva, para acabar con un "esquema económico perverso que privilegia la especulación financiera, que beneficia en extremo a los acreedores del país". Para ese fin, se ejecutarían políticas públicas activas, de fomento de la inversión, la producción y el empleo ("500.000 puestos de trabajo generados"), así como la modernización integral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un generoso programa de subsidios para la adquisición de vivienda ("160.000 familias con escrituras"), una reforma agraria, una "política energética soberana" centrada en el fortalecimiento de Petroecuador, la extensión del control estatal a todas las etapas de la industria hidrocarburífera y la revisión de los contratos con las compañías adjudicatarias, amén de una "política soberana de deuda externa", que por ejemplo no vacilaría en reestructurar el servicio de la deuda, o incluso declarar una moratoria en el pago de la misma, si el Gobierno necesitaba ese dinero para cubrir necesidades domésticas.

En otras palabras, la Alianza PAIS preconizaba "un cambio radical en el modelo económico porque el neoliberalismo ha fracasado; hay que pasar de una economía rentista, financiera y descontrolada, a una economía que apoye al sector productivo y a la generación de empleo, sobre todo a través de la economía popular". Por si a alguien le quedaban dudas, Correa enfatizó que un Gobierno aliancista respetaría la dolarización, que a fin de cuentas había traído estabilidad monetaria, aunque él se lamentaba de que el Estado hubiese perdido la herramienta de la depreciación para relanzar las exportaciones y corregir el déficit comercial, no quedándole más opción que subir los aranceles a las importaciones. Por último, el Plan de Gobierno contemplaba una revolución educativa y de la salud, y una revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana, que entre otros puntos preveía consultar en referéndum a la ciudadanía sobre el futuro de un TLC cuya firma ahora, en los términos negociados con Estados Unidos, significaría un "suicidio social" para el Ecuador.

Aunque para él, el ex presidente Lucio Gutiérrez no era más que un "traidor" y un "corrupto", no podían dejarse de advertir similitudes en los discursos preelectorales del economista y del antiguo militar: como Correa, Gutiérrez ganó las elecciones de 2002 incidiendo en su patriotismo desinteresado, su condición de valedor de mestizos, indígenas y pobres, su intolerancia con toda forma de corrupción, los llamamientos a "refundar" el país y la promesa de virtualmente todo lo que los electores ansiaban oír. Incluso en la indefinición ideológica se asemejaban, ya que uno y otro aseguraban estar por encima de los encasillamientos doctrinales, si bien era cierto que Correa resultaba menos ambiguo en este punto desde el momento en que aceptó la etiqueta de izquierdista.

4. Victoria electoral en 2006 frente al multimillonario Noboa

Según los sondeos de intención de voto, Correa, que escogió el color verde manzana como distintivo de su candidatura, se pasó toda la precampaña y parte de la campaña a remolque de León Roldós Aguilera, candidato conjunto de la Red Ética y Democracia (RED) y la Izquierda Democrática (ID), con un perfil socialdemócrata, y del prianista Noboa, magnate de la industria bananera y, más allá de las imprescindibles arengas sociales, sensible a los intereses de la derecha proempresarial, los acreedores de deuda y las multinacionales. Ambos eran unos políticos curtidos en estas lides, con otros dos intentos presidenciales a sus espaldas (Roldós, además, era un antiguo vicepresidente de la República, llegado al puesto en 1981 de resultas de la muerte en accidente aéreo de su hermano, el presidente Jaime Roldós Aguilera). Pero para finales de septiembre, el aliancista ya les había adelantado, una remontada espectacular si se tenía presente que apenas un año atrás no tenía ni programa, ni partido ni plataforma de apoyos.

El vertiginoso ascenso de Correa tuvo mucho que ver con unas técnicas de captación de voto que dentro y fuera de Ecuador fueron calificadas de "demagógicas". Unos eslóganes que reflejaban voluntarismo y optimismo (Pasión por la patria, Porque otro país es posible), un repertorio de canciones pegadizas y, sobre todo, el efectista logotipo animado de un cinturón restallando a la voz de "¡dale correa!", en fácil aprovechamiento metafórico del apellido del candidato, conformaron una puesta en escena triunfalista donde el aspirante presidencial se deshacía en sonrisas, exudaba dinamismo juvenil y vislumbraba un futuro luminoso para el país.

Con Roldós desfondado por no poder competir en exuberancia mediática, la carrera electoral quedó reducida a un duelo de dos entre Correa y Noboa. El líder del PRIAN, muy fuerte en su bastión de Guayas y en general bien acogido por el electorado costeño, situó a los ecuatorianos ante la disyuntiva de elegir entre el "populismo comunista de Correa" (exactamente lo mismo que había imputado a Gutiérrez en 2002) y la "libre empresa que yo represento". A Noboa no parecía preocuparle el posible efecto boomerang de su propio populismo desaforado, sus aspavientos religiosos ("yo soy el héroe de Dios") y su mesianismo, al estilo del siempre excesivo Bucaram, del que en el pasado había sido acólito. Para los medios internacionales, lo que acontecía en el Ecuador era una pugna entre un "populismo de izquierdas" y un "populismo de derechas".

Correa devolvió las descalificaciones a su adversario, acusándole, por ejemplo, de "explotar a los niños en sus plantaciones de plátanos" y de ser un "oligarca que no paga impuestos". Pero además, encontró tiempo para sembrar continuas polémicas: denunció a Mahuad ante el Ministerio Fiscal por "delitos de lesa humanidad"; advirtió a Febres-Cordero, en tanto que "cabeza de la partidocracia", que la Asamblea Nacional Constituyente iba a traer "el fin de la impunidad"; fustigó a Roldós por desligarse, tan sólo horas después de haberlo firmado con él el 10 de agosto, de un acuerdo que les comprometía, en caso de ganar las elecciones, a convocar el 16 de enero de 2007, es decir, al día siguiente de la toma de posesión, una consulta popular para la instalación de la Constituyente; y desairó al Gobierno colombiano al opinar que la guerrilla de las FARC no tenía naturaleza terrorista.

En la recta final de la campaña, el ímpetu de Correa se desinfló en beneficio de su inmediato perseguidor, Noboa. Las últimas encuestas seguían poniendo al aliancista en cabeza con un máximo del 30% de los votos, un porcentaje más que insuficiente para ser proclamado ganador en la primera vuelta, donde se exigía el 50% más uno de los votos o bien superar el 40% y sacar una ventaja de 10 puntos al segundo más sufragado. De hecho, desde la restauración democrática de 1979, ningún candidato se había proclamado presidente en la primera vuelta. El 15 de octubre de 2006 no se rompió esta tradición, pero saltó una sorpresa: Noboa quedó primero con el 26,8% y Correa segundo con el 22,8%. Eliminados fueron Gilmar Gutiérrez (17,4%), León Roldós (14,8%) y la socialcristiana Cynthia Viteri Jiménez de Villamar (9,6%). En las elecciones al Congreso, clamorosamente ignoradas por la Alianza PAIS, los partidos más votados fueron el PRIAN (28 escaños), el PSP (24), el PSC (13) y la coalición RED-ID (12).

La reacción inmediata de Correa fue bramar contra el "verdadero atraco" de que había sido objeto, incluso, según él, con la complacencia de la misión de observadores de la OEA; sólo la "manipulación" de un buen número de votos en blanco computados como votos válidos a favor de otras candidaturas le había impedido señorear la primera vuelta. Caída en saco roto la denuncia, Correa solicitó la "unión" tras su candidatura y conseguir así el 26 de noviembre "un triunfo contundente de la ciudadanía para evitar que el país siga en las manos de los mismos de siempre y se convierta en una gran hacienda bananera".

El llamado del aliancista encontró eco: su opción fue respaldada por la CONAIE, el partido indígena Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) y la ID. Los gestos populistas, los insultos y las advertencias arreciaron a medida que se acercaba la segunda vuelta: Noboa alertó del riesgo de una "guerra civil" y la conversión del Ecuador en "otra Cuba" si el "bacalao mentiroso" y el "diablo comunista" se imponía en las urnas, mientras que Correa acusó al hombre más adinerado del país de tener de su parte a las "mafias" del TSE y expresó su temor a una "repetición" del fraude cometido en la primera vuelta, cuando le "robaron ocho puntos".

El 26 de noviembre de 2006, la incertidumbre sobre quién iba a ser el próximo presidente del Ecuador se zanjó a favor de Correa al recibir el economista un contundente 56,7% de los votos. En su primera conferencia de prensa tras la votación, el político izquierdista se proclamó presidente electo y aseguró que había ganado "el afán de cambio" en una "jornada histórica". También reafirmó que la Asamblea Constituyente era "includicable" y manifestó su disposición, forzada por la tenencia de su lado de sólo un reducido número de diputados -que ni siquiera eran de su partido-, a dialogar con las agrupaciones políticas para alcanzar aquel objetivo "con las menores fricciones". El 4 de diciembre el TSE declaró presidente electo a Correa, que días después asistió en la ciudad boliviana de Cochabamba, por invitación del Gobierno de Evo Morales, a los actos de la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

A últimos de diciembre, el mandatario electo completó la designación del Gabinete, cuyos miembros más destacados eran María Fernanda Espinosa Garcés en Relaciones Exteriores, Guadalupe Larriva González en Defensa (la presidenta del PS-FA, convertida en la primera mujer ministra de Defensa y de hecho el primer civil en portar esta cartera en varias décadas), Ricardo Patiño Aroca en Economía y Finanzas, Gustavo Larrea Cabrera en Seguridad Interna y Externa, y Alberto Acosta Espinosa en Energía y Minas

El 14 de enero de 2007 Correa fue investido simbólicamente por los líderes indígenas de Zumbahua. Las autoridades civiles le confirieron el bastón de mando, el poncho y el sombrero, tres atributos tradicionales de poder en las comunidades andinas, mientras que los yachags o sabios quechuas le practicaron un ritual chamánico para limpiarle de cualquier mala energía y atraerle los buenos auspicios de los dioses. El ceremonial indígena evocó el oficiado justo un año atrás en Tiahuanaco con Evo Morales, quien flanqueó a Correa en Zumbahua junto con Chávez. "La larga noche neoliberal está terminando (?) Se acabó la democracia de plastilina (?) Empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI", fueron algunos de los mensajes lanzados por Correa en la parroquia cotopaxense donde hizo voluntariado social en su juventud

Al día siguiente tuvo lugar en el Palacio Legislativo de Quito, sede del Congreso Nacional, la ceremonia oficial del traspaso de poderes y la jura del cargo, a la que asistieron, además de Chávez y Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la chilena Bachelet, el peruano Alan García, el paraguayo Nicanor Duarte, el colombiano Álvaro Uribe y el haitiano René Préval, además del iraní Mahmoud Ahmadinejad, cuya presencia en Quito levantó muchos comentarios en el sentido de que podía ser sintomática de las intenciones del nuevo presidente en la arena internacional.

En el discurso inaugural de su mandato de cuatro años, que con la presente normativa constitucional no podía ser renovado, Correa proclamó el inicio de la Revolución Ciudadana

?concepto que en lo sucesivo habría que transcribir en mayúsculas-, convocó para el 18 de marzo una consulta popular sobre la elección de la Constituyente y anunció su intención de renegociar la deuda externa en el contexto de una "nueva política económica", por la que Ecuador comenzaría "a independizarse de los organismos multilaterales de crédito" y experimentaría un "cambio radical, profundo y rápido del modelo vigente de explotación y de injusticia". Al decreto de convocatoria del referéndum le siguió otro que reducía drásticamente los salarios de los trabajadores del sector público y los altos funcionarios del Estado, comenzando por la retribución del propio presidente.

5. La Revolución Ciudadana de Correa; la batalla del proceso constituyente

El entusiasta estreno de Correa se tiñó el 24 de enero de conmoción y de luto: la recién inaugurada ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, pereció junto con su hija de 17 años y cinco oficiales del Ejército en un trágico accidente aéreo en las proximidades de la Base de Manta. Su muerte fue causada por el choque del helicóptero en el que viajaba contra otro aparato en el curso de unos ejercicios militares de visión nocturna. Apenas dos días antes, Larriva había anunciado que el Ministerio, de acuerdo con lo prometido por el presidente en la campaña electoral, no iba a renovar el contrato con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para las operaciones y el asentamiento de sus tropas en Manta. Esta circunstancia, y más todavía el hecho de ser la víctima mujer, civil y una política de fuertes convicciones izquierdistas y con planes de reforma de la institución castrense, despertaron la predecible sospecha dentro y fuera de su partido de que el siniestro había sido en realidad un atentado con conspiración detrás.

Tal hipótesis fue desechada por el Gobierno, que puso en marcha una comisión internacional de investigación orientada a determinar posibles fallos técnicos y, si se revelasen éstos, depurar responsabilidades por omisión o negligencia. Por de pronto, el comandante del Ejército, general Pedro Machado, fue relevado del cargo por no explicar satisfactoriamente las circunstancias de un accidente en el que al parecer no se respetaron normas básicas de seguridad. Correa nombró a otra mujer al frente de la Defensa, Lorena Escudero Durán, y descartó que hubiera un ambiente de "tensión" entre el Ejecutivo y el mando militar.

Sin embargo, las tensiones sí presidieron, y bastante crudamente, la cuenta atrás para el referéndum del 18 de marzo, en el que Correa se jugaba el elemento medular de su proyecto de país. En su decreto ejecutivo del 15 de enero, la Presidencia encomendó la organización de la consulta al TSE, pero el órgano de control electoral lo que hizo fue remitir el expediente al Congreso a fin de que éste determinara si la convocatoria del Ejecutivo se ajustaba a la Constitución vigente. Los partidos opositores que dominaban el Legislativo indicaron a las claras que no tenían prisa en emitir la luz verde a un proceso constituyente que no les gustaba y que además les suscitaba serias dudas de legalidad. Los grupos parlamentarios afines a la Constituyente eran los del Pachakutik, la ID, la RED, el PS-FA y el Movimiento Popular Democrático (MPD). Hostiles a misma eran el PRIAN de Noboa, el PSC de Pascual Del Cioppo, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram y la Unión Demócrata Cristiana (UDC) de Diego Ordóñez. El PSP de Gutiérrez era ambiguamente favorable. El frenazo a la iniciativa de Correa ponía en evidencia la anómala ausencia de diputados de su partido.

A últimos de enero, miles de irritados manifestantes progubernamentales asediaron el Palacio Legislativo y pusieron en fuga a los congresistas, antes de conseguir rebasar el cordón policial e irrumpir en el recinto, con la exigencia de que agilizaran la convocatoria de la consulta popular. Se produjeron hechos violentos que Correa censuró, pero cuya responsabilidad última endosó a los legisladores y a los vocales del TSE, "por su actuación en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos (?), expresada mayoritariamente en las urnas". Más aún, el presidente instó a sus seguidores a que continuaran con las movilizaciones, que rogó no degeneraran en episodios de violencia, para doblegar la "voluntad de los caciques de los partidos políticos".

Además, anunció la creación de sendas comisiones para investigar "el atraco bancario" de 1998-1999, durante la Presidencia de Mahuad, cuando no menos de 8.000 millones de dólares se evaporaron de las arcas del Estado en el contexto de una descomunal crisis bancaria y

financiera, y para esclarecer "los delitos de lesa humanidad" cometidos por cuerpos de la seguridad del Estado durante la administración de Febres-Cordero, al que organismos de Derechos Humanos imputaban el asesinato y la desaparición de varios opositores a su Gobierno.

El 13 de febrero el Congreso dio vía libre a la convocatoria del referéndum con el voto de 54 de los 57 legisladores presentes, que eran todos los de la minoría progubernamental, los del PSP e, inesperadamente, algunos de la UDC, y con la ausencia de casi toda la oposición. El Gobierno se apuntó su primera victoria política, pero la batalla por la Constituyente, advirtió el jefe del Estado, continuaba.

El 1 de marzo el TSE convocó la consulta para el 15 de abril en los términos solicitados por Correa. Cuatro días después, la mayoría opositora del Congreso, con 57 votos a favor, decidió recurrir la convocatoria ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que el estatuto enviado por el Gobierno y ratificado por TSE no respetaba los términos aprobados por el Legislativo sobre la consulta, lo que a su entender incurría en inconstitucionalidad. En concreto, Correa, desdiciéndose de su anterior postura, dejaba abierta la puerta a que la Constituyente pudiera disolver el Congreso dentro de sus facultades y asumir temporalmente el poder legislativo. Al día siguiente, el Congreso aumentó su presión al oficialismo aprobando la remoción de Jorge Acosta al frente del organismo electoral. Una jornada más tarde, el 7 de marzo, el TSE, en una medida sin precedentes, reaccionaba declarando destituidos a 57 congresistas, los 52 que habían votado el cese de Acosta y los cinco que habían presentado la demanda de inconstitucionalidad, por "interferir en el proceso electoral".

Correa, confortado por el 70% de apoyo popular que le conferían los sondeos e ignorando las acusaciones de "dictador" que empezaban a lanzarle los partidos conservadores, avaló la insólita decisión del TSE y exhortó a "mantener la resistencia pacífica" contra los opuestos a su proyecto político. A la espera de que el Tribunal Constitucional dirimiera el conflicto de competencias institucionales entre el Legislativo y el TSE, partidarios y detractores del Gobierno midieron sus fuerzas a golpe de manifestación en Quito y Guayaquil. En la capital, turbas enardecidas volvieron a amenazar y agredir a algunos de los diputados destituidos por el TSE.

El 12 de marzo, para demostrar que la grave crisis política no le distraía de su gestión, Correa declaró "en estado de emergencia" al sistema de salud y ordenó al Ministerio de Finanzas que desembolsara 40 millones de dólares para atender las necesidades del sector; cuatro días más tarde, era el sistema educativo el declarado en emergencia y el destinatario de otra partida extraordinaria, de 125 millones de dólares, para "sacarlo de la destrucción en que lo han dejado 20 años de neoliberalismo". Además, el Gobierno aumentó el Bono de Desarrollo Humano, facilitado a madres solteras, ancianos y discapacitados sin recursos, de los 15 a los 30 dólares; eliminó cobros en hospitales y colegios públicos; duplicó el subsidio para viviendas de interés social; y distribuyó urea importada de Venezuela a mitad del precio de mercado para los agricultores.

El pulso institucional lo inclinó Correa para su lado al conseguir la instalación de 21 diputados suplentes que, pese a pertenecer a los partidos de la oposición, eran maleables a los deseos del Gobierno, y desestimar el Constitucional el recurso de amparo presentado por los titulares cesados. El presidente, con tono apremiante, instó a los ecuatorianos a votar sí a la elección de "una Asamblea Constituyente de plenos poderes para reformar el marco institucional y elaborar una nueva Constitución"; si ganaba el no, él dimitiría. El llamado encontró un eco resonante: el 15 de abril, con una participación del 71,3%, la respuesta aprobatoria arrasó con el 81,7% de los votos.

Exultante, Correa se felicitó por el "triumfo histórico" y pidió a sus compatriotas ir "con júbilo" a la Asamblea Constituyente "para tener una democracia representativa y mucho más participativa, para despolitizar los tribunales y los organismos de control, para descentralizar, para superar el nefasto modelo neoliberal". En lugar de este último, se abrió camino el "socialismo del siglo XXI", concepto que en la región estaba popularizando Chávez, quien lo tenía por el eje principal de su proyecto político para Venezuela y exportable al resto de una

América bolivariana, si bien su homólogo y amigo ecuatoriano recalcó que aquí tal planteamiento no iba traducirse en medidas confiscatorias o estatistas. Días después, el presidente lanzó el Plan Ecuador, para, a modo de contrarresto del Plan Colombia, y con el apoyo de la ONU, contener el desbordamiento transfronterizo de los problemas de inseguridad y precariedad humana provocados por la campaña antidroga practicada en el país vecino, empezando por la afluencia masiva de desplazados, a los que Ecuador dotaría de un estatus de refugiados.

El 24 de abril el TSE convocó elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de septiembre y el Congreso destituyó a los nueve magistrados del Tribunal Constitucional, impidiendo la ejecución de su auto, emitido en la víspera, que restituía en sus cargos de 51 de los 57 congresistas despedidos por el TSE. La enésima exhibición del mal funcionamiento del sistema institucional ecuatoriano se saldó, por tanto, con una victoria total para Correa, que calificó el acto postrero del Tribunal Constitucional de "nueva jugarreta de la partidocracia".

Hasta el día de las elecciones, Correa subrayó la línea izquierdista nacionalista de su Gobierno con una serie de decisiones y declaraciones inequívocas. Por ejemplo, a finales de abril dio por terminadas las relaciones con la "burocracia indeseable" que el FMI y el Banco Mundial representaban, ruptura que escenificó con sendas medidas contundentes: con el FMI, declaró cancelada la deuda nacional tras el pago a la institución de 9 millones de dólares, y en cuanto al Banco Mundial, declaró persona non grata a su representante en el país, el brasileño Eduardo Somensatto, por su actitud de "chantaje" en 2005 al Gobierno de Palacio y a él en particular como ministro de Economía y Finanzas, cuando congeló un préstamo en represalia por la supresión del FEIREP.

Más controversia suscitó el recrudecimiento de las malas relaciones del presidente con los medios de comunicación y los periodistas críticos con su gestión, a los que cubrió de epítetos insultantes y contra alguno de los cuales se querelló por calumnias, como fue el caso del periódico La Hora, que le había acusado de incitar al uso de la violencia; la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), en lo que fue secundada por organismos periodísticos internacionales, advirtió que al judicializar la labor de la prensa, Correa no buscaba sino amordazar la libertad de información.

El presidente alimentó las imputaciones de prepotencia al ratificar en su puesto a Ricardo Patiño, censurado por el Congreso el 13 de julio por cuatro supuestos delictivos luego de divulgar la cadena Teleamazonas un video en el que se veía al ministro haciendo unos comentarios que sugerían una connivencia del Gobierno con ciertas operaciones especulativas de agencias aseguradoras que comerciaban con bonos ecuatorianos. Días después, sin embargo, Correa desplazó a Patiño del Ministerio de Economía y lo nombró ministro del Litoral. El nuevo titular económico, Fausto Ortiz de la Cadena, renunció a su vez menos de un año después en desacuerdo con la orden, dictada por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) y ejecutada por el Gobierno, de embargar al grupo empresarial Isaías, propietario de casi 200 empresas y cuatro canales de televisión críticos con el oficialismo.

Las elecciones del 30 de septiembre de 2007 a la Asamblea Nacional Constituyente marcaron el tercer triunfo consecutivo de Correa en las urnas en menos de un año y, con sus demoleedores resultados, garantizaron la elaboración de la Carta Magna que el presidente perseguía para vertebrar su proyecto de Estado refundado, con unas instituciones políticas fortalecidas a costa de los poderes fácticos tradicionales. Con una participación del 73,2%, la Alianza PAIS acaparó el 69,5% de los votos y metió 80 asambleístas en un hemicycleo de 130 miembros, esto es, una holgada mayoría absoluta.

Tamaño victoria dio alas a Correa para decretar, el 4 de octubre, que el 99% de las ganancias extraordinarias entendidas tales como el diferencial entre el precio de mercado y el precio pactado por las compañías y el Estado-obtenidas por las empresas petroleras que operaban en el país, y no el 50% como hasta ahora, fuera a las arcas fiscales del Estado y el 1% restante se quedara en el bolsillo de aquellas en concepto de beneficios. Para el Gobierno, la medida era

impostergable si Ecuador pretendía "retomar el control soberano" de sus recursos. Cinco compañías, Petrobras, Repsol-YPF, Perenco, Andes Petroleum y City Oriente, ya habían aceptado renegociar sus contratos de participación.

Instalada en la Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí, el 29 de noviembre de 2007, la Constituyente empleó ocho meses, dos de ellos de prórroga, en elaborar el nuevo texto constitucional. Pero antes, como primeras disposiciones, ratificó a Correa en la Presidencia, se revistió de capacidad plenipotenciaria y ordenó el receso indefinido de las funciones del Congreso, que en la práctica, tal como había anunciado el presidente, quedó disuelto. En esta sesión inaugural, Correa avisó que el proceso de cambio de las estructuras vigentes iba a ser "radical, profundo y rápido", y que había llegado la hora "de ajustar cuentas con la historia".

Finiquitada y aprobada el 24 de julio de 2008 con el voto favorable de 94 asambleístas sobre 126 presentes, la nueva Carta Magna, estructurada en un preámbulo, 9 títulos, 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria (de la Constitución de 1998) y una disposición final, reforzaba considerablemente la Función Ejecutiva al otorgar al presidente de la República las capacidades de promulgar decretos urgentes en materia económica, disolver el Legislativo en una serie de circunstancias y formular en exclusiva las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, hasta ahora manejadas por el Banco Central del Ecuador, el cual perdía por tanto su autonomía; el presidente, además, podría ser reelegido por un mandato cuatrienal consecutivo.

Otros cambios importantes eran: la definición del Ecuador como un Estado plurinacional y el reconocimiento de un capítulo de derechos a las comunidades indígenas; la asunción por el Estado del control exclusivo sobre sectores estratégicos como la energía, el agua, la biodiversidad, la minería y las telecomunicaciones; la institución de la Asamblea Nacional como titular de la Función Legislativa, en lugar del Congreso Nacional; la "construcción", como nuevo poder del Estado, del "poder ciudadano", ejercido "a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria"; la concesión del voto facultativo a las personas entre los 16 y los 18 años de edad; la equiparación en derechos y deberes con el matrimonio de las uniones de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales; el reconocimiento de los derechos de los emigrantes y los inmigrantes; la incorporación a la normativa laboral de la figura de la baja paternal; la prohibición de trabajar a los menores de 15 años y la erradicación progresiva del trabajo infantil; la universalidad y obligatoriedad de las coberturas educativa, educativa y de la seguridad social; y la prohibición del estacionamiento de bases e instalaciones militares extranjeras.

La integración a todos los niveles con los países de América Latina y el Caribe, inclusive la creación de una ciudadanía común, la libre circulación de personas y el impulso de una política común de defensa, era una meta fundamental de las relaciones internacionales del Ecuador. Para sus promotores, dos eran los sustratos ideológicos de este texto: el socialismo del siglo XXI y la noción tradicional, recogida explícitamente en el preámbulo, del *sumak kawsay*, expresión quechua que representa el buen vivir, "una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza". En líneas generales, la nueva Constitución podía considerarse progresista y orientada a potenciar el desenvolvimiento y protagonismo del Estado, sus instituciones, los colectivos sociales y el agregado de ciudadanos.

Además, la Ley Fundamental establecía un Régimen de Transición de 30 artículos para aplicar desde el momento en que la misma fuera aprobada en referéndum. El Régimen establecía la convocatoria de elecciones generales y la prolongación, hasta que se constituyera la nueva Asamblea Nacional, del funcionamiento de la Asamblea Constituyente pero transformada en Comisión Legislativa y de Fiscalización, para cumplir las funciones legislativas propias de la Asamblea Nacional. Asimismo, en el período de transición se reorganizarían los órganos judiciales, se aprobarían un rosario de leyes y los partidos políticos tendrían que inscribirse de nuevo en el Consejo Nacional Electoral presentación mediante de una declaración de principios ideológicos, programa de gobierno, estatuto, símbolos, siglas y nóminas de cargos orgánicos y militantes.

El 28 de septiembre de 2008 la nueva Constitución Política de la República del Ecuador fue aprobada en referéndum con un 63,9% de síes frente a un 28,1% de noes y un 7,2% de votos nulos. La participación en todo el país fue del 75,7%. Correa saboreó su cuarta victoria consecutiva en las urnas: "Gracias a Dios, mi triunfo ha sido tan contundente y aplastante que ha superado nuestras expectativas", manifestó. Sin embargo, el éxito del oficialismo quedó empañado por la victoria del no, aunque por la mínima, en Guayaquil, patria chica del presidente y feudo de la oposición amén de motor económico del país, donde el alcalde, el dirigente socialcristiano y ex aspirante presidencial Jaime Nebot Saadi, instó al Gobierno central a no frustrar las aspiraciones autonómicas de la provincia costera. La Constitución entró en vigor el 20 de octubre de 2008, tras lo cual se abrió un plazo de 45 días para llamar a elecciones generales.

6. La definición regional: un alineamiento no completo con el eje bolivariano
(Epígrafe en previsión)

7. Triunfal reelección en 2009
(Epígrafe en previsión)

(Cobertura informativa hasta 20/10/2008)